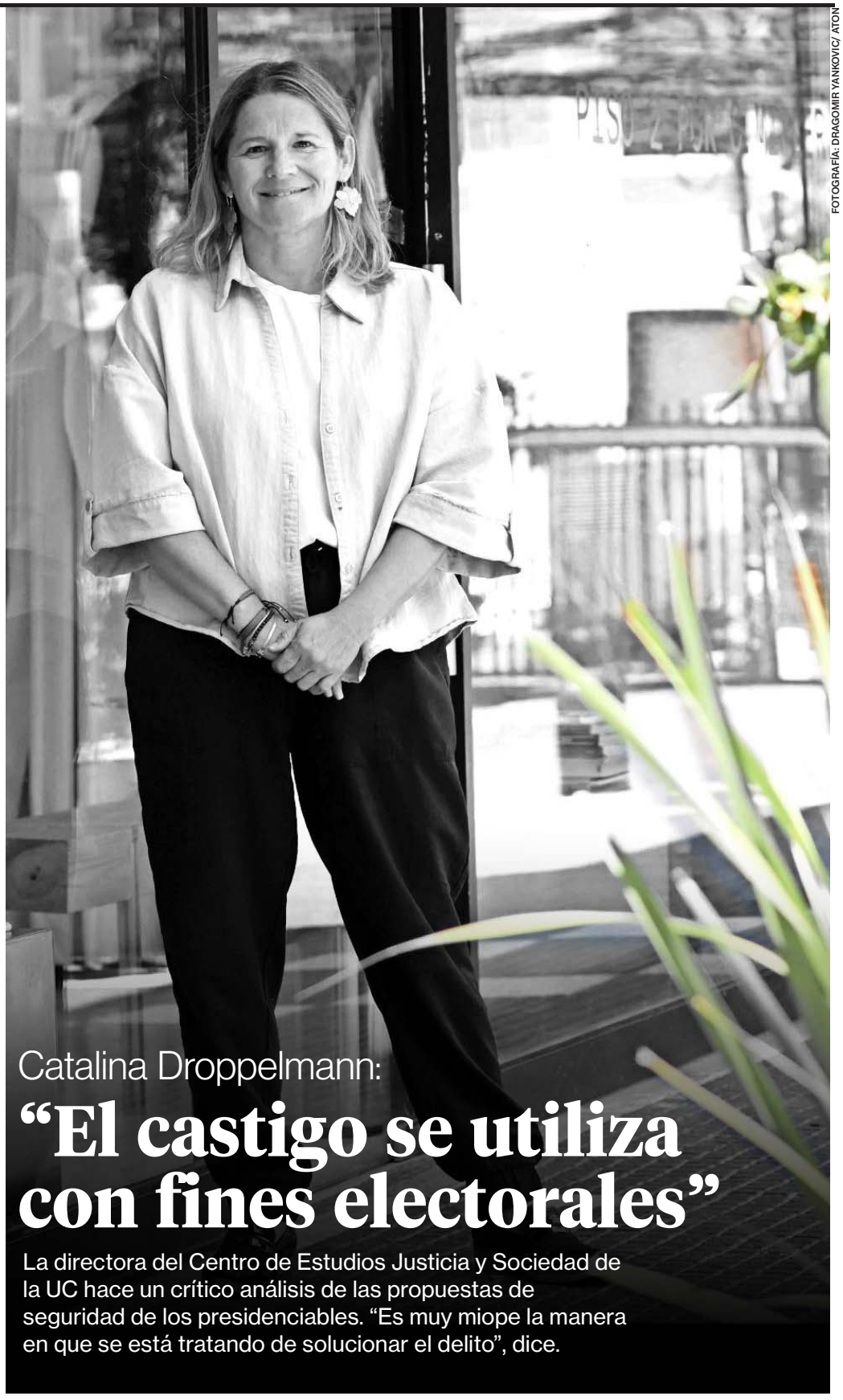
la Segunda

Fecha: 13/11/2025 Audiencia: 33.709 Sección:
Vpe: $1.487.182 Tirada: 11.692 Frecuencia: 0
Vpe pág: $1.776.800 Difusión: 11.692
Vpe portada: $1.776.800 Ocupación: 83,7%



FOTOGRAFÍA: DRAGOMIR YANKOVIC/ ATON

Catalina Droppelmann:

“El castigo se utiliza con fines electorales”

La directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la UC hace un crítico análisis de las propuestas de seguridad de los presidenciables. “Es muy miope la manera en que se está tratando de solucionar el delito”, dice.

Claudia Valle

Su trabajo en el Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso —cuando se ponía en marcha la reforma procesal penal— fue determinante para que la hoy directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, Catalina Droppelmann, se trasladara de la psicología clínica a la criminología.

Comenzó con peritajes y atendiendo a personas inimputables y luego derivó en la investigación. Tanto así que hoy es máster en Investigación Criminológica y doctora en Criminología de la Universidad de Cambridge.

Interesada desde siempre en la confluencia de temas que tocan el contexto social, la salud mental, la justicia y el delito, es autora del libro «Transitions out of Crime: New Approaches on Desistance in Late Adolescence» (Routledge, 2022) donde explora el mundo de niños y adolescentes infractores de ley.

Desde esa mirada, no se sorprende que el debate electoral se haya centrado en la seguridad pública. “Independiente de los niveles de delincuencia que tengamos, las personas están profundamente atemorizadas. Esta situación es grave. Este y el próximo Gobierno se tienen que hacer cargo. Si sumas altos niveles de temor, más la desconfianza en las instituciones, esa percepción de corrupción, de impunidad, del acá nadie va a castigar a nadie, es la tormenta perfecta”, explica.

“No es sostenible tener una cárcel especial”

—En todo este contexto, hace unos días el Presidente Boric anunció el cierre de Punta Peuco como una penal especial. ¿Es una buena decisión?

—No es sostenible tener una cárcel especial por un principio de igualdad ante la ley. Además, hay un tema de género: las 20 mujeres que están cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad lo hacen en la cárcel de mujeres (de San Joaquín); están segregadas, pero es una cárcel común. Entonces, me parece acertado como señal política. Pero eso no va a tener impacto en el hacinamiento carcelario, porque es una cárcel muy chica.

—¿Cuál es el impacto de que el cierre de Punta Peuco se concrete en plena campaña presidencial?

—Era una promesa que tenía que cumplir antes del término del Gobierno. Creo que tiene que ver con cómo se instrumentaliza la cárcel, como fenómeno, durante todo tipo de elecciones... es impresionante.

—¿Se puede garantizar la seguridad de los condenados por violaciones a los DD.HH.?

—Gendarmería tiene un sistema muy estudiado y consolidado de segmentación a partir de una evaluación de compromiso delictual, que no sólo mide la peligrosidad, sino que también la habitualidad al entorno carcelario. En general, Gendarmería no mezcla a un primerizo con una persona que

laSegunda
Fecha: 13/11/2025 Audiencia: 33.709 Sección:
Vpe: $1.331.179 Tirada: 11.692 Frecuencia: 0
Vpe pág: $1.776.800 Difusión: 11.692
Vpe portada: $1.776.800 Ocupación: 74,92%

tenga antecedentes penales. Me imagino que trasladarán a Punta Peuco a personas mayores, enfermas o con muy bajo compromiso delictual.

—Algunos han planteado que la integridad de los reclusos podría estar en riesgo.

—No está en riesgo porque siguen bajo la custodia de Gendarmería. Y es un deber del Estado asegurar la custodia y la seguridad de esas personas, como también la de los presos comunes que no están en Punta Peuco. Desde el punto de vista de la igualdad de la ley, no hay personas que sean merecedoras de más seguridad o de más protección del Estado mientras están privadas de libertad. La única diferencia es que tengan enfermedades crónicas, dificultades que le impidan vincularse con otra persona de la población penal o que requieran ciertas condiciones de vivienda distinta al resto de la población penal.

"La gente quiere castigo y que el castigo duela"

—La seguridad se ha tomado la campaña presidencial.

—Eso no es sorpresivo. En general, en las campañas la utilización de la delincuencia como herramienta electoral trasciende tu casa política. Personas tremendamente progresistas terminan ofreciendo medidas que, desde el punto de vista punitivo, afectan derechos y ni siquiera hay mucha conciencia de la contradicción que eso implica. La gente asocia mano dura a más cárcel, más presos. Las promesas que se vinculan a más cárcel tienen réditos políticos tremendos. Piensa en el apoyo que tiene Bukele.

—La gente quiere castigo.

—En general, la gente quiere castigo y que el castigo duela. Cuando tú dices "condiciones dignas de cárcel", no, la gente piensa: "Ojalá no tengan agua, no tengan comida, que nadie los saque al doctor cuando estén enfermos". Las personas creen que el cambio se da cuando hay un dolor asociado.

—¿Eso ocurre solo en Chile?

—En todas partes, en todas las campañas políticas, el castigo se utiliza de manera retórica con fines electorales, más en América Latina, porque los estados son más débiles, tienen menos presupuesto para hacer grandes reformas y este tipo de promesas probablemente se cumplan. Hay miles de compromisos de campaña que quedarán en nada, pero sí podrás decir "soy duro con el delito". Si tienes el parlamento de tu lado, podrás aprobar agendas cortas que endurezcan las penas.

—¿Los candidatos presidenciales han abordado este tema de manera adecuada?

—Ese es el problema. La forma en que se hacen cargo del tema es muy limitada. No sacamos nada con perseguir al último eslabón de la cadena, encarcelar a la mujer que está vendiendo droga en su población. Tenemos que perseguir al *supplier*, al crimen organizado y al mercado ilegal. Y para tener un impacto real debes incorporar no solo mecanismos de control, sino también de prevención, articulación interinstitucional e inteligencia.

—Como el levantamiento del secreto bancario.

—Levantamiento del secreto bancario, seguir la ruta de la plata, hacer que las agencias del Estado compartan información. La cárcel es la última respuesta. La seguridad es un continuo. Aquí te estás focalizando en el último eslabón de la cadena que no tiene un impacto significativo en la reducción del delito, incluso lo puede amplificar. Puedes seguir construyendo cárceles, pero eso no va a significar que haya menos delitos. Es muy miope la manera en que se está tratando de solucionar el delito desde el punto de vista de la campaña. Y ahí tienes diferencias y matices.

"Kaiser lleva al extremo la distancia social"

—¿Cuáles son los matices entre los candidatos?

—La visión que Kast instala de la delincuencia es de un enemigo externo. Por eso, hay dos flancos: la delincuencia y la migración. Son dos enemigos que afectan la seguridad del Estado, que te pone en una condición de gran peligro, una condición bélica, donde el Estado se tiene que proteger a toda costa. Ahí cabe la militarización, la mano dura, la tolerancia cero, porque es un estado de emergencia. Es muy conveniente como discurso, porque en una emergencia, solamente tienes que atacar el síntoma, no las causas. A mi juicio, el Estado puede o debe hacerse cargo de las emergencias, pero al mismo tiempo, de las causas.

—Según esa visión, si no tuviéramos migración, no tendríamos delincuencia.

—Exacto. Y eso a la gente le hace sentido, lo cual no se condice necesariamente con la evidencia. Es verdad que la migración no regulada abre espacio a mercados ilegales, pero no es cierto que la mayor cantidad de personas que están en el sistema criminal sean migrantes.

—La de Matthei es distinta.

—Matthei se sitúa en algo que para nosotros es de libro: expandir el ámbito de acción del sistema de justicia criminal. Allí incorpora la idea de la eficiencia; el argumento es que no hemos sido eficientes. Por eso, tecnologiza un poco la respuesta, pone drones, software y otras herramientas. Acá la delincuencia no es un problema social, donde las causas estructurales importen, el problema es que no hemos sabido manejarla.

—Jeannette Jara tiene otra propuesta.

—Jara tiene un discurso un poco más consistente con su casa política. Plantea que combatir la seguridad no puede ser a costa de ciertos valores democráticos. Eso lo han tratado de sopesar, porque tampoco es algo muy popular. Implica que el combate al delito tiene que ser más transversal y con los ciudadanos. Por eso, en sus propuestas aparecen un poco más la prevención y la participación comunitaria. Pone ciertos énfasis que, según la evidencia, son efectivos en la prevención del delito, como la cohesión social. Y eso también podría afectar un poco más el temor.

> "Personas progresistas terminan ofreciendo medidas que, desde el punto de vista punitivo, afectan derechos y ni siquiera hay mucha conciencia de la contradicción que eso implica".

> "Es muy sintomático también esta retórica de que todo está fuera de control. Tenemos un problema de criminalidad en Chile, sí. ¿Pero nuestras cárceles están tomadas por el crimen organizado? No".

—¿En qué sentido?

—Porque el temor es una variable que no solo se mueve por los niveles de victimización que tenga un país. Hoy la gente está más atemorizada porque el crimen se ha complejizado, tenemos más homicidios y más presencia de armas. Pero los niveles de victimización, si miras el agregado en términos generales, no han empeorado, pero el miedo sí aumenta. El miedo al delito no solo se alimenta por los niveles de delincuencia, sino que también por otras inseguridades: el temor al desempleo, al otro, a lo desconocido, al cambio, a las nuevas formas de delincuencia en el ciberespacio, etc. Para intervenir en el temor tienes que generar mayor cohesión.

—¿Y la propuesta de Kaiser?

—Kaiser es mucho más extremo que Kast. Kaiser lleva al extremo esta condición de emergencia, este estado de guerra y plantea de manera más fuerte la polarización y la diferencia entre ciudadanos. Kaiser propone de frentón que hay ciudadanos que tienen menos derechos que otros. Desconoce los delitos de lesa humanidad. Hay un punitivismo tremendamente extremo que sería difícil de aplicar desde el punto de vista normativo, de la Constitución. Kaiser lleva al extremo la distancia social, la diferenciación, la segmentación, las desigualdades y no ofrece ninguna solución que sea muy consistente o viable.

—Parisi propone implementar un barco cárcel.

—Eso también es súper consistente con su casa política, porque para Parisi el ciudadano es apolítico. Él no cree mucho en el Estado. Gran parte de las medidas que establece son el uso de las tecnologías que no son permitidas desde el punto de vista legal. Además, plantea que el Estado no es la solución para el delito, esta pasa por privatizar, por sacar, por expulsar, incluso plebiscitando. En el debate que hicimos nosotros, el representante de Parisi dijo que había temas que él podía plebiscitar, hacer que la gente votara por internet, si estaba a favor o en contra de la pena de muerte, a favor o en contra de tal castigo. Por lo tanto, ahí no hay nada rescatable, por lo menos desde el punto de vista de la evidencia.

—Entonces, se ha hablado mucho de seguridad pero no se apunta a resolver el problema de fondo.

—Exacto. Es muy sintomático también esta retórica de que todo está fuera de control. Tenemos un problema de criminalidad en Chile, sí. Es peor que antes, sí. Tenemos las cárceles hacinadas, sí. ¿Pero nuestras cárceles están tomadas por el crimen organizado? No. Hay países de América Latina donde las cárceles son autogobernadas, ni siquiera entra el Estado en las cárceles. Creo que se ha instrumentalizado el tema del crimen organizado, porque genera gran temor, se asocia a la migración —en general son bandas criminales extranjeras—, a la violencia, a la extorsión, al secuestro, a la tortura. Entonces, se condice con la realidad, sí, pero hasta cierto punto. Se utiliza políticamente mucho más de lo que realmente se debería siendo consistente con la evidencia.